

■ DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA
A LA LIBERTAD DE PRENSA

■ La necesidad de opinión pública.
En el Bicentenario del Decreto de
Libertad Política de la Imprenta

Alberto Ramos Santana

La necesidad de opinión pública. En el Bicentenario del Decreto de Libertad Política de la Imprenta¹

AUTOR

ALBERTO RAMOS
SANTANA

Catedrático de Historia
Contemporánea de la
Universidad de Cádiz

Vocal de la Comisión
Nacional para la
Conmemoración del
Bicentenario de la
Constitución de 1812

El breve preámbulo que abría el “Decreto nº 9, de la Libertad Política de la Imprenta”, publicado el 10 de noviembre de 1810 por las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en la Real Isla de León, es, además de una declaración de intenciones de los diputados que lo aprobaron, una explicación concisa y precisa de la finalidad del decreto:

“Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.

En poco más de medio centenar de palabras los diputados recogían tres ideas esenciales que representaban muy bien el cambio político y social que las Cortes recién inauguradas anunciaban. Por una parte, el derecho a la libertad individual de pensamiento y expresión, como el mejor freno a la arbitrariedad y el despotismo; por otra el afán por mejorar la ilustración de la nación, entendida ésta como el conjunto de los ciudadanos; y en tercer lugar, pero no menos importante, la necesidad de forjar y conocer la opinión pública.

Si bien estas ideas se habían desarrollado en círculos intelectuales e ilustrados, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, el control político e ideológico ejercido por la maquinaria del estado había impedido su desarrollo, y la publicación de todo tipo de impresos se veía dificultada, cuando no cercenada, por la censura y todo tipo de impedimentos administrativos. Sin embargo, a partir de 1808, iniciada la insurrección contra la invasión napoleónica y durante los primeros años de la Guerra de la Independencia, la formación de las Juntas y la convocatoria de las Cortes, las circunstancias políticas excepcionales propiciaron la aparición de todo tipo de impresos y papeles públicos, así como periódicos, de muy diversa calidad y plenos de contenidos políticos, ideológicos y polémicos, y muy atentos a la actualidad de esos momentos.

Debemos tener presente que los acontecimientos bélicos que tuvieron lugar con la invasión napoleónica propiciaron un marco, quizás no deseado, pero sí favorable, para desarrollar los ideales ilustrados y de libertad. El inicio de la Guerra de la Independencia, incluso los acontecimientos que se precipitaron tras los sucesos de Aranjuez, acrecentaron la necesidad de contar con una opinión pública a la que formar, adoctrinar y seducir para propagar el mensaje patriótico contra el enemigo francés —o contra la resistencia española. Lo cierto es que en estos años del conflicto bélico, tanto la literatura más popular, la que se difundía

a través del cordel en los puestos callejeros o vendida por ciegos y buhoneros, como la literatura creada por los sectores dirigentes o por los nuevos escritores se vuelve esencialmente política. En este sentido, los intelectuales más comprometidos con la idea del cambio político y social, los que derivaron en doceañistas, aprovecharon el resquicio de alegalidad que se abre con la retención de los reyes en Bayona para tratar de socavar los cimientos del régimen absoluto. Se trata, desde luego, de un proceso paulatino que deriva del didactismo con que en el siglo XVIII se concebía la escritura, tanto la puramente literaria, como la más cargada de intencionalidad política, como cualquier otra manifestación de arte, supeditadas al servicio de la difusión del mensaje ilustrado, y entendida como una contribución más al progreso de la nación, un progreso que avanzaba renqueante, con dificultades impuestas por el poder absoluto, en las últimas décadas del XVIII y los primeros años del XIX y que a partir de 1808, y sobre todo tras la salida de Madrid de los franceses después de la batalla de Bailén, adquiere nuevos derroteros².

Y es que en esta transformación del literato cortesano, o miembro escogido de la república de las letras, en escritor comprometido con el destino de su patria tiene mucho que ver el nacimiento de la opinión pública y para ello ha de esperarse a que se produzca la denominada “revolución española”, es decir un cambio nacional posibilitado por la presión de unas circunstancias excepcionales y de política internacional como es la invasión napoleónica de 1808. Surge así una literatura que trata de hacer reflexionar al lector —porque todavía sus creadores son ilustrados convencidos del poder de la razón— y para ello opta por la exposición y la argumentación en prosa, por una prensa periódica que se hará cada vez más ágil y más demandada como puede verse en la evolución que sigue uno de estos primeros periódicos, el *Semanario Patriótico* de Quintana³.

Y junto a esa literatura que bebe en las fuentes ilustradas, toda una suerte de papeles públicos, de impresos con proclamas, llamamientos a la guerra, manifestaciones de fervor patriótico, de manera que el impreso se convirtió en un arma importante

en la batalla ideológica y política del momento, y en una manifestación de la opinión pública, de la voz de la nación. Así lo entendió el impresor que tomó la iniciativa de publicar *Demostración de la lealtad española*, en cuyos tomos se pueden leer muchos ejemplos de este tipo de papeles públicos, que fueron recopilados y publicados porque, según las palabras introductorias que escribió el impresor para justificar su iniciativa, en ellos se manifiesta la voz de la nación:

“He creído pues que haría un servicio a la presente y a las futuras generaciones, reuniendo en un cuerpo todos los papeles que con este motivo se han publicado, porque considero en ellos la voz pública de la nación. Aquí es donde aparece toda la majestad de pueblo español, su energía y carácter heroico en los magnánimos afectos que expresa y manifiesta, dignos a la verdad de ser coronados con los más gloriosos triunfos”⁴.

Efectivamente, desde julio de 1808 el número de impresos y papeles públicos, que salían de las imprentas sin licencia previa, fue en considerable aumento, y en septiembre de ese mismo año el Consejo de Castilla intentó prohibir la impresión de papeles sin la previa licencia del Juez de Imprentas o del propio Consejo, advirtiendo de sanciones a quienes incumpliesen lo estipulado. Fue inútil, la libertad de impresión era un hecho y su uso siguió en constante aumento con el beneplácito de las nuevas autoridades constituidas tras las insurrecciones contra la invasión napoleónica⁵. Pero cuando, junto al discurso patriótico, comenzaron a publicarse opiniones críticas con la recién formada Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, el debate sobre la bondad o el abuso de la libertad de imprenta recobró intensidad. Es conocido cómo el propio Presidente, Floridablanca, se había manifestado en contra al considerar que la libertad podía socavar la autoridad, y que el Juez de Imprentas, Colón y Larrátegui, pidió que se controlara la excesiva libertad de imprenta que se estaba produciendo desde la invasión francesa, al tiempo que, matizando su informe, y reconociendo que muchos de esos papeles patrióticos había que dejarlos que se conocieran, manifestaba que

la libertad de imprimir debía conciliarse con el respeto a la leyes y las autoridades.

En esta situación de dudas y tensión ante la libertad de imprenta se produjo el traslado de la Junta Central a Sevilla a fines de 1808. Y en mayo de 1809 se produjo una verdadera crisis cuando, tras publicar un artículo de Calvo de Rozas crítico con la dirección de la guerra, se ordenó la suspensión del *Correo Político y Literario de Sevilla*, y se anunciaron algunas suspensiones más. Aunque finalmente se autorizó la publicación, nombrando censores que no coartasen la libertad de imprenta, y pese a los intentos, a principios de septiembre, del Consejo de España e Indias, ahora presidido por Colón y Larrátegui, de aplicar el Reglamento redactado por el antiguo Juez de Imprentas, que chocó con las reticencias de la Junta a utilizarlo, la crisis demostró la necesidad de regularla.

Tras el rechazo implícito al Reglamento de Colón, la Junta había recibido una “Proposición” de Lorenzo Calvo de Rozas, fechada el 12 de septiembre, en favor de la libertad de imprenta, y la había remitido al Consejo, que, en su informe, se mostró partidario de la censura previa. Ante la premura de tiempo, por estar pendiente, según la Junta, la convocatoria de Cortes, la Comisión encargada de preparar dicha convocatoria pidió un dictamen a la Junta de Instrucción Pública, que, reunida, debatió sobre diversas memorias recibidas, entre las que destacaban la de Álvaro Flórez Estrada⁶ y la de su vocal José Isidoro Morales⁷; finalmente la Junta, siguiendo la opinión de Morales, votó mayoritariamente a favor de la libertad de imprenta, acordando enviar la *Memoria* de José Isidoro Morales a la Comisión de Cortes, y proponiendo que el debate se pospusiera a los de las próximas Cortes, puesto que dicha libertad “solo puede existir y ser compatible con una buena constitución”⁸.

Mientras en los órganos de poder y de gobierno se debatía sobre la libertad de imprenta, los sectores liberales partidarios de propiciar y fortalecer la opinión pública, desataron una intensa campaña a favor de la libertad. Desde 1810 los folletos e impresos argumentando en su favor se multiplicaron, y la Regencia, que había sustituido en enero

de 1810 a la Junta Central, mantuvo de hecho la situación de alegaldad y, por tanto, la libertad de hecho de imprimir todo tipo de papeles públicos. En esta campaña intervinieron de manera decisiva los periódicos liberales gaditanos, y de forma muy decisiva, desde su nacimiento el 24 de agosto de 1810, *El Conciso*, que, como antes lo había hecho también el *Semanario Patriótico*, desarrollaron una contundente batalla a favor de la necesaria libertad de imprenta como medio de encauzar la opinión pública⁹.

Iniciadas las sesiones de Cortes en la Real Isla de León, muy pronto, el 27 de septiembre de 1810, se planteó la necesidad de crear una comisión que preparase la deliberación e las Cortes sobre la libertad política de la imprenta¹⁰. El interés de *El Conciso* en este asunto le llevó a recoger, en la edición del 30 de septiembre en su sección de Cortes, la intervención de Argüelles, quien propuso a las Cortes que

“sin ánimo de empeñarlas en discusión, no podía menos de llamar la atención del Congreso hacia un objeto de la mayor importancia, tal que le miraba como preliminar necesario para la salvación de la patria; la libertad política de la imprenta: dijo que no pretendía que desde luego se deliberase acerca de un punto tan arduo y de tanta consecuencia; pero que si la propuesta era de la aprobación del congreso se podía pasar á la votación sobre si se había de nombrar una comisión que con presencia de lo que se ha escrito sobre este particular examinara el asunto, y propusiera a las Cortes el resultado de su trabajo, sus reflexiones, y el modo con que se podría fijar la libertad política de la imprenta”.

La libertad de la que hablaba Argüelles —y que apoyaron los diputados Zorraquín y Pérez de Castro— se refería fundamentalmente a los temas políticos. A pesar de ello, narra el cronista de *El Conciso* “habiendo manifestado alguna oposición un diputado eclesiástico”, salió a la tribuna el también eclesiástico Muñoz Torrero que, “lleno de fervor peroró sobre los males que nos ha traído la falta de libertad de imprenta y sobre los bienes que

eran consecuencia de su libertad política”, al insistir nuevamente en este punto, consideró que había que seguir “un rumbo opuesto al de la junta central, sustituyendo a su criminal silencio y misteriosa conducta la publicidad de las sesiones y la libertad de escribir sobre asuntos políticos, cuya prohibición desde los primeros días había desacreditado a la central”, para añadir que “era preciso consultar la opinión pública cuyo eco era la imprenta”¹¹.

Los liberales eran conscientes de que la libertad de imprenta había que regularla pronto, pues como dijo Muñoz Torrero, y recogió *El Conciso* del 4 de octubre cuando volviera Fernando VII “tendrá mas fuerza que el poder ejecutivo, y entonces si no hay opinión pública y los medios de restablecerla libremente, arruinará cuando quiera las Cortes y la nación como lo hizo Godoy porque no había opinión pública ni medio para establecerla libremente”.

Los diputados reacios a las reformas intentaron evitarla por todos los medios, y así el diputado Morales Gallego sostuvo que la libertad de la imprenta era un crimen, y otros diputados consideraron que la libertad de imprenta tenía más inconvenientes que ventajas. En la misma línea la Iglesia, desde el púlpito, anatematizará continuamente tal libertad como medio de acabar con la religión, en un discurso que mantendrá a lo largo de todo el siglo XIX.

En realidad, el fin que esperaban alcanzar los liberales era que pudiera extenderse una verdadera ilustración, como soñaba el redactor de *El Conciso* cuando el 12 de octubre publicaba: “¡Día feliz en que las luces empezarán a difundirse desde las columnas de Hércules hasta el Pirineo, pasarán los inmensos mares, y reflejarán en los mas remotos confines del imperio español!”

Al fin la libertad de imprenta se reguló mediante el noveno Decreto de las Cortes, el día 10 de noviembre de 1810, y se ratificó en la Constitución de 1812, que, en la línea constitucional que consideraba que al asegurar el derecho instrumental (la libertad de imprenta), se aseguraba el derecho de libre expresión del pensamiento¹², y servía para posibilitar la creación de una opinión pública.

Conviene recordar, en este sentido, que los diputados doceañistas entendieron la libertad política de imprenta como una forma de ilustración, como una medida necesaria para la educación de los ciudadanos, que ilustrados, podían opinar libremente. Sin duda por eso la Constitución consagra la libertad de imprenta en el Título IX, “De la Instrucción Pública”, que en el artículo 371 dice:

“Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”.

Y también conscientes de la importancia de la defensa de la libertad de imprenta, los diputados encomendaron a las propias Cortes, es decir, a la primacía del poder legislativo, su tutela, de manera que el artículo 131, que trata “de las facultades de las Cortes”, en el punto 24, le encomienda al legislativo “Proteger la libertad política de la imprenta”.

Pese a que las Cortes habían regulado, con los artículos trece y siguientes del propio decreto de 10 de noviembre de 1810, una Junta de Censura, y pese a que el derecho de libertad de imprenta, en tanto que era también de libertad de expresión y pensamiento, quedó incompleto al cercenar el derecho a la libertad de religión, el “Decreto nº 9, de la Libertad Política de la Imprenta” propició la proliferación no sólo de nuevos periódicos, sino también la publicación de múltiples folletos, manifiestos y hojas sueltas dedicados a la defensa de la libertad y la Constitución, aunque también, en uso de una libertad que negaban, los enemigos de la Constitución pudieron arreciar en sus ataques.

NOTAS

1. Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Excelencia del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía (PAI 05 – HUM 0549), sobre “Las Cortes de Cádiz y el primer liberalismo en Andalucía. Elites políticas, ideologías, prensa y literatura (1808-1868)”.
2. No obstante, no se debe olvidar que la derrota de Trafalgar ocupa un lugar significativo en la politización de la literatura, pues, como ya señalara Alcalá Galiano, es la primera ocasión en que el pueblo en general cobró interés en la *res publica*.
3. Sobre Quintana y el *Semanario Patriótico*, y en general sobre la opinión pública en España en el período 1808-1810, el sugerente trabajo de Fernando Durán, “La construcción de la opinión pública en España, 1808-1810”. En: Roberto Breña (ed.): *En el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810*. El Colegio de México y Centro de Estudios políticos y Constitucionales, México, 2010, págs. 67 a 94.
4. *Demostración de la lealtad: colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de ejército, y relaciones de batallas publicadas por las juntas de gobierno, o por algunos particulares en las actuales circunstancias*. En la imprenta de Repullés, Madrid, 1808, t. I.
5. En este contexto conviene recordar que la Constitución de Bayona, en su artículo 145, establecía la libertad de imprenta, pero posponiéndola a dos años después de la aplicación completa de la propia constitución: “Dos años después de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se establecerá la libertad de imprenta. Para organizarla se publicará una ley hecha en Cortes”.
6. *Reflexiones sobre la libertad de imprenta*. En: *Obras de Álvaro Flórez Estrada*, BAE, Madrid, 1958, t. II.
7. *Memoria sobre la libertad política de la imprenta, leída en la Junta de Instrucción Pública por uno de sus vocales D. J. I. M. y aprobada por la misma Junta*. En Sevilla, por don Manuel Muñoz Álvarez, año de 1809. Manejamos la edición facsímil editada por la Universidad de Huelva, con introducción de Manuel Peña Díaz: “José Isidoro Morales y la libertad de imprenta (1808-1810)”, Huelva, 2008.
8. Gaspar de Jovellanos: *A sus compatriotas. Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central*. Coruña, 1811, págs. 94 a 97; la cita en la página 97.
9. En el prospecto manuscrito, localizado en la Biblioteca Provincial de Cádiz, con el que los editores presentaron *El Conciso*, se puede leer: “Nunca ha sido más conveniente que en esta época actual el propagar cuantas ideas y noticias puedan ser útiles a la nación. Nadie es más charlatán ni escribe más que los franceses; nadie es más modesto ni escribe menos que los españoles; esta ventaja que tienen aquellos para alucinar y seducir los incautos, sólo puede contrarrestarse multiplicando por nuestra parte diversos papeles y escritos para su confusión, y para ilustración de los ciudadanos”. Utilizamos la transcripción de Beatriz Sánchez Hita en su libro *Los periódicos del Cádiz de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Catálogo comentado*. Colección Bicentenario, Diputación de Cádiz, Cádiz, 2008, págs. 91 y 92. Las negritas son nuestras.
10. Tras una propuesta de Mexía Lequerica para que los secretarios certificaran los impresos y escritos que llegaran a las Cortes, en la que aludía a la libertad de imprenta, una intervención de Argüelles provocó que ese mismo día se nombrara la comisión. Cfr. *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias*, Sesión de 27 de septiembre de 1810.
11. *El Conciso*, 30 de septiembre de 1810.
12. José Luis García Ruiz: “Los derechos fundamentales en la Constitución de Cádiz”. En: *La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*. Universidad católica Andrés Bello, Unión Latina, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Histórica Tavera, Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, Caracas, 2004, pág. 413.

BIBLIOGRAFÍA

- Cantos Casenave, Marieta, Fernando Durán López y Alberto Romero Ferrer (eds.) *La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814)*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006 (t. I y II), 2008 (t. III).
- Cantos Casenave, Marieta y Alberto Ramos Santana: “Las Cortes de Cádiz y la libertad de imprenta”. En: *Prensa y publicística en las Cortes de Cádiz*. Catálogo de la Exposición. Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz, 2005.
- Durán López, Fernando: “La construcción de la opinión pública en España, 1808-1810”. En: Roberto Breña (ed.): *En el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810*. El Colegio de México y Centro de Estudios políticos y Constitucionales, México, 2010, págs. 67 a 94.
- Fernández Segado, Francisco: “La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz”. En: *Revista de Estudios Políticos*, nº 124, 2004, págs. 29 a 54.
- Flórez Estrada, Álvaro: *Obras de Álvaro Flórez Estrada*, BAE, Madrid, 1958, t. II.
- García Ruiz, José Luis: “Los derechos fundamentales en la Constitución de Cádiz”. En: *La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*. Universidad católica Andrés Bello, Unión Latina, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Histórica Tavera, Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, Caracas, 2004, págs. 399 a 423.
- Jovellanos, Gaspar de: *A sus compatriotas. Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central*. Coruña, 1811.
- La Parra, Emilio: *La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz*. Nau, Valencia, 1984.
- Peña Díaz, Manuel: “José Isidoro Morales y la libertad de imprenta (1808-1810)”. En: *Memoria sobre la libertad política de la imprenta, leída en la Junta de Instrucción Pública por uno de sus vocales D. J. I. M. y aprobada por la misma Junta. En Sevilla, por don Manuel Muñoz Álvarez, año de 1809*. Universidad de Huelva, Huelva, 2008.
- Riaño de la Iglesia, Pedro: *La imprenta en la Isla Gaditana durante la Guerra de la Independencia. Libros, folletos y hojas volantes (1808-1814). Ensayo bio-bibliográfico documentado*. Ed. A cargo de José Manuel Fernández Tirado y Alberto Gil Novales, Ed. Del Orto, Madrid, 2004.
- Sánchez Hita, Beatriz: *Los periódicos del Cádiz de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Catálogo comentado*. Colección Bicentenario, Diputación de Cádiz, Cádiz, 2008.